


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

Entidad originadora:	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Fecha (dd/mm/aa):	11 de mayo de 2026
Proyecto de Decreto/Resolución:	“Por la cual se deroga la Resolución 2206 de 2016, se adoptan los Términos de Referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental – EIA requerido para el trámite de la licencia ambiental global o definitiva para actividades de explotación minera de mediana y gran escala y se toman otras determinaciones.”

1. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE JUSTIFICAN SU EXPEDICIÓN.

El Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, ejerciendo las facultades que le fueron otorgadas mediante la Ley 99 de 1993, el Decreto Ley 3570 de 2011, adicionado con el Decreto 1682 de 2017 y el Decreto 1076 de 2015 realizó el análisis interdisciplinario de la información de contexto técnica, ambiental y socioeconómica que le permitió identificar y recopilar los criterios y razones para justificar y adelantar la actualización de los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental-EIA en proyectos de explotación minera, para lo cual tuvo en cuenta políticas, lineamientos y criterios de carácter nacional e internacional:


Las bases del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 2294 de 2023 “POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022- 2026 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” establecen, en el eje “1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental”, literal d. “Instrumentos de control y vigilancia ambiental para la resiliencia”, que se ampliarán y modernizarán los procesos de licenciamiento ambiental y sus instrumentos de evaluación, seguimiento y control para incluir nuevas actividades de los sectores agropecuario, hidrocarburos, minero, turismo, manufacturero, infraestructura y de comunicaciones. Se evaluará el proceso de licenciamiento ambiental y sus instrumentos técnicos para ampliar y fortalecer la participación de las comunidades en las decisiones ambientales y la implementación efectiva de instrumentos de monitoreo, control y vigilancia tanto de los recursos naturales como de la gestión de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, así como ejercicios efectivos de control social.

Por su parte el eje 4. “Transformación productiva, internacionalización y acción climática” contextualiza que el sector minero-energético ha representado el 7 % del PIB nacional, produce el 33 % de la inversión extranjera, el 56 % de las exportaciones, y aporta más de 500.000 empleos formales. Asimismo, durante el año 2021, el sector aportó cerca de \$8,8 billones en regalías, de las cuales 26 % provienen de minería y el 74 % de los hidrocarburos. Para aportar en esa transformación productiva el literal C contempla la “Transición energética justa, segura, confiable y eficiente” y en el numeral 2 de este literal el “Desarrollo económico a partir de eficiencia energética, nuevos energéticos y minerales estratégicos para la transición”.

En este nuevo escenario de demanda de minerales estratégicos se prevé en las bases del plan nacional de desarrollo la “Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas” y la actualización de la política minera con énfasis en: (i) el uso y gestión de mecanismos para el ordenamiento minero ambiental; (ii) creación de mecanismos de articulación para la aprobación de instrumentos técnicos —Programa de Trabajos y Obras (PTO) y Estudio de Impacto Ambiental (EIA)—; (iii) reconocimiento de derechos mineros ancestrales, artesanales y de pequeña escala, a partir de análisis diferenciados de problemáticas socioambientales; (iv) uso de tecnologías en la fiscalización, promoción y priorización de la exploración, extracción y comercialización formal de minerales estratégicos como oro, materiales de construcción, cobre, níquel, cobalto, litio y tierras raras, entre otros. Se contempla también que se promoverá la reforma de la normativa minera con el fin de crear instrumentos para la gestión del cierre minero y la restauración de los pasivos ambientales derivados de estas actividades, principalmente afectaciones al recurso hídrico por uso de mercurio para extraer minerales auríferos.

En el mismo eje 4, el literal D, se enfoca en “Economía productiva a través de la reindustrialización y la bioeconomía” y en su numeral 1 establece la necesidad de migrar de una economía extractivista a una sostenible y productiva usando como vehículo la Política de Reindustrialización, hacia una economía del conocimiento, incluyente y sostenible la cual buscará cerrar brechas de

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

productividad, fortalecer encadenamientos productivos, diversificar la oferta interna y exportable, así como profundizar la integración con América Latina y el Caribe. La política desarrollará las siguientes apuestas estratégicas: (i) transición energética, que abrirá oportunidades para la atracción de inversiones sostenibles, jalonará la industria de insumos para la transición, apoyará el proceso de producción con energías limpias y la producción nacional de medios de transporte y movilidad sostenible; (ii) soberanía alimentaria y agroindustrial mediante el fortalecimiento de encadenamientos en la producción de alimentos, fertilizantes, agroinsumos, maquinaria, equipos y digitalización para llevar la modernidad al campo, aumentar la productividad y reconocer la economía popular como fuente de valor.

Esta nueva demanda de minerales estratégicos para la transición energética, la seguridad alimentaria, la construcción de infraestructura de transporte y la reindustrialización del país, con base en un mejor conocimiento del potencial geo-científico de los minerales yacientes en el subsuelo, generará nuevos proyectos de explotación minera de tipo subterráneo, escenario para el cual los instrumentos ambientales actuales requieren ser reforzados y complementados. En este nuevo escenario y entendiendo la riqueza de recursos naturales renovables del país y la necesidad de un adecuado ordenamiento minero ambiental, la participación ciudadana juega un papel fundamental, aspecto que requiere que los términos de referencia genéricos para la elaboración de los estudios de impactos ambiental para actividades de explotación minera sean actualizados.


Sumado a lo anterior, la Resolución 2206 de 2016 no establece una diferenciación entre proyectos de pequeña minería y proyectos de mediana y gran minería, sino que consagra un instrumento uniforme aplicable a actividades con dinámicas operativas, capacidades productivas e impactos ambientales sustancialmente distintos. Lo anterior desconoce que el artículo 2.2.5.1.5.5 del Decreto 1073 de 2015, modificado por el Decreto 1666 de 2016, sí prevé una clasificación expresa de las escalas de producción minera, reconociendo que cada una de ellas presenta particularidades técnicas, operativas y ambientales propias, las cuales deben ser consideradas por la administración en el marco de los procesos de reglamentación, así como de evaluación y seguimiento ambiental.

En ese sentido, la derogatoria de la referida resolución y la consecuente expedición de términos de referencia diferenciados, unos aplicables a proyectos de pequeña minería y otros dirigidos a proyectos de mediana y gran minería, permiten armonizar el ordenamiento jurídico minero y ambiental, así como adecuar las exigencias técnicas y documentales a la realidad de cada tipo de proyecto, atendiendo las necesidades del administrado bajo criterios de proporcionalidad, razonabilidad y eficacia administrativa, sin desconocer en ningún caso la jerarquía constitucional y legal de la protección ambiental. Por el contrario, dicha diferenciación fortalece la función preventiva de los instrumentos ambientales, en tanto posibilita una identificación, valoración y manejo más precisos de los impactos ambientales asociados a cada escala de explotación, así como la definición de medidas de prevención, manejo, seguimiento y control acordes con la magnitud, complejidad y riesgo de las actividades mineras objeto de evaluación.

Finalmente, otro elemento de especial relevancia que fue considerado en el marco de la presente iniciativa normativa corresponde a lo dispuesto por la Sentencia C-280 de 2024, mediante la cual la Corte Constitucional reafirmó la necesidad de que los estudios de impacto ambiental previstos en el artículo 57 de la Ley 99 de 1993 incorporen criterios y elementos técnicos que permitan identificar, evaluar y gestionar los impactos asociados al cambio climático. En particular, dicha providencia reconoce que la evaluación ambiental no puede limitarse exclusivamente a los efectos inmediatos y directos de los proyectos, obras o actividades, sino que debe integrar un análisis más amplio relacionado con los riesgos climáticos, las emisiones de gases de efecto invernadero, la vulnerabilidad de los ecosistemas y la capacidad de adaptación frente a escenarios de variabilidad y cambio climático.

En ese contexto, la actualización de los términos de referencia aplicables al sector minero constituye una medida necesaria para garantizar que los instrumentos de evaluación ambiental se encuentren acordes con los desarrollos jurisprudenciales recientes, así como con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado colombiano en materia de acción climática

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

2. AMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO

La norma propuesta adopta los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA para proyectos de explotación minera de mediana y gran escala y se fundamenta en la necesidad de ajustar e incorporar los avances y actualizaciones que se han presentado a partir del año 2016 en relación con el desarrollo de los asuntos del sector minero de carácter ambiental y social y los escenarios de demanda de minerales estratégicos para la transición energética justa, la seguridad alimentaria, la construcción de infraestructura y la reindustrialización del país. Los términos de referencia no están contemplados para la minería de pequeña escala toda vez que esta actividad requiere un enfoque diferencial razón por la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se encuentra en proceso de adopción de unos términos específicos para ese segmento de la minería.

La norma objeto de esta iniciativa va dirigida a los titulares de proyectos mineros de mediana y gran escala para adelantar el trámite de licencia ambiental, así como a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible, Grandes Centros Urbanos y Establecimientos Públicos Ambientales de que trata la Ley 768 de 2002.

3. VIABILIDAD JURÍDICA


3.1 Análisis de las normas que otorgan la competencia para la expedición del proyecto normativo

El artículo 5 de la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones estableció entre las funciones de este Ministerio la de regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural (numeral 2); determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos y las actividades mineras, industriales, de transporte y en general todo servicio o actividad que pueda generar directa o indirectamente daños ambientales (numeral 10) y definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las actividades económicas (numeral 14).

El Decreto 1076 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible” en el Título 2, Capítulo 3, Sección 1 del Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.2.3.1.3. dispone lo siguiente: ARTÍCULO 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental.

En lo que respecta a los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental-EIA, el artículo 75 de la Ley

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

99 de 1993, modificado por el artículo 223 de la Ley 1450 de 2011 y posteriormente modificado por el artículo 178 de la Ley 1753 de 2015 establece que "(...)El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá los términos de referencia genéricos para la elaboración del estudio de impacto ambiental; sin embargo, las autoridades ambientales los fijarán de forma específica dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud en ausencia de los primeros"

El Decreto-Ley 3570 de 2011, adicionado por el Decreto 1682 de 2017, establece los objetivos del Minambiente y consagró; entre otros "la definición de las regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible.

Por otra parte, el artículo 19 del Decreto-ley 3570, adicionado por el Decreto 1682 de 2017, establece que son funciones de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana - DAASU, entre otras, las siguientes: ... () "1. Proponer las normas ambientales y las regulaciones de carácter general sobre ambiente a las que deberán sujetarse las actividades mineras, industriales, de transporte y en general todo servicio o actividad que pueda generar directa o indirectamente daños ambientales". "5. Diseñar y promover, al interior de los sectores productivos y de servicios, estrategias para la adopción de mejores prácticas ambientales orientadas a mejorar la competitividad, productividad, autogestión e internalización de costos".

3.2 Vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada

La norma rige a partir de su publicación en el diario oficial.

3.3. Disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas

El proyecto normativo deroga la Resolución 2206 de 27 de diciembre de 2016.


3.4 Revisión y análisis de la jurisprudencia que tenga impacto o sea relevante para la expedición del proyecto normativo (órganos de cierre de cada jurisdicción)

La derogatoria de la resolución 2206 de 2016 y consecuente generación de los términos de referencia aplicables a proyectos de mediana y gran minería encuentra sustento no solo en la necesidad de armonización técnica y normativa del sector minero y ambiental, sino también en el amplio desarrollo jurisprudencial que ha consolidado el carácter preventivo, técnico y reforzado de los instrumentos de evaluación ambiental dotándolos de relevancia suficiente al momento de autorizar el desarrollo de proyectos obras o actividades mineras.

A continuación, se citan algunas providencias proferidas por la Honorable Corte Constitucional que, si bien no contienen una orden expresa dirigida a la actualización de los términos de referencia aplicables al sector minero, sí desarrollan de manera reiterada la obligación de la administración de garantizar que los instrumentos de comando y control ambiental cumplan de forma efectiva su función preventiva. Lo anterior, en atención a que de la adecuada formulación, aplicación y fortalecimiento de dichos instrumentos depende no solo la protección de bienes jurídicos colectivos, como el ambiente sano y los recursos naturales, sino también la garantía efectiva de derechos fundamentales de las comunidades potencialmente impactadas por el desarrollo de proyectos, obras o actividades de alto impacto ambiental. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que los mecanismos de evaluación y control ambiental deben mantenerse actualizados, ser técnicamente suficientes y responder a las particularidades de las actividades objeto de regulación, de manera que permitan una adecuada identificación, valoración y gestión de los riesgos e impactos ambientales asociados.

- Sentencia T-445 de 2016, reiteró que las actividades extractivas poseen la potencialidad de generar impactos significativos

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

sobre los ecosistemas, el recurso hídrico y las comunidades, motivo por el cual el Estado tiene el deber de fortalecer los mecanismos de evaluación, seguimiento y control ambiental bajo criterios técnicos suficientes y actualizados. Dicha providencia resaltó que el desarrollo de actividades mineras debe estar condicionado a la protección efectiva del ambiente y de los recursos naturales, reconociendo que la evaluación ambiental constituye una herramienta esencial para anticipar, prevenir y mitigar daños ambientales.

- Sentencia C-035 de 2016 enfatizó que la explotación de recursos naturales no puede desarrollarse desconociendo la obligación constitucional de protección ambiental prevista en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, precisando que las autoridades deben adoptar medidas regulatorias idóneas para garantizar un equilibrio entre aprovechamiento económico y sostenibilidad ambiental.
- Sentencia SU 095 de 2018 en la cual se requirió al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Minería, a la Unidad de Planeación Minero Energética, al Servicio Geológico Colombiano, que en la política pública de los sectores de hidrocarburos y de minería, así como en los contratos de concesión robustezcan las estrategias y cláusulas contractuales de participación ciudadana, información, coordinación de acciones sociales y de inversiones sociales con entidades públicas y exijan así a las empresas del sector minero energético que respeten los derechos humanos, realicen acciones de debida diligencia para la gestión de los riesgos ambientales y sociales con ocasión de las operaciones de sus actividades y amplíen espacios de información con los alcaldes de los municipios donde operan.
- Sentencia C-280 de 2024 que incorporó un elemento de especial relevancia al señalar que los estudios de impacto ambiental previstos en el artículo 57 de la Ley 99 de 1993 deben incluir consideraciones relacionadas con cambio climático, lo que implica que los instrumentos técnicos que orientan la elaboración de dichos estudios deben actualizarse para incorporar variables asociadas a emisiones, vulnerabilidad climática, riesgos acumulativos y medidas de adaptación y mitigación.


3.5 Circunstancias jurídicas adicionales

No aplica

4. IMPACTO ECONÓMICO

Tomando como referencia lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.1.2.1.6. “**Memoria justificativa**” del Decreto 1609 de 2015 la norma propuesta no genera impactos económicos negativos sobre los recursos del Gobierno Nacional por el contrario, está orientada a garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales y sociales en los proyectos de explotación minera en el país buscando la sostenibilidad de los recursos naturales renovables dentro del ejercicio de participación, socialización y concertación con las comunidades, que deberá redundar en el bienestar de los ciudadanos, la garantía de derechos fundamentales y la generación de riqueza de las regiones mineras con minerales estratégicos para la transición energética justa, la seguridad alimentaria, la construcción de infraestructura y la re industrialización del país.

El impacto económico para los proyectos mineros objeto de los términos de referencia corresponde a la realización de análisis obligatorios en el marco de la normativa ambiental colombiana como lo son el estudio de impacto ambiental y la formulación de los planes y programas respectivos, los cuales se realizan con la finalidad de identificar, cuantificar y zonificar los impactos generados sobre un proyecto en su área de influencia y las medidas de manejo respectivas.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

5. VIABILIDAD O DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la aplicación del acto administrativo, no se requiere de una disponibilidad presupuestal específica.

6. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

La norma propuesta no genera impactos al patrimonio cultural, teniendo en cuenta que el interesado en desarrollar el proyecto debe cumplir con lo establecido en la Ley 1185 de 2008 y el Decreto 763 de 2009 del Ministerio de Cultura. La norma propuesta tampoco genera impactos negativos al ambiente por el contrario establece las reglas para la identificación y cuantificación de los mismos y el establecimiento de medidas para prevenirlos, corregirlos, mitigarlos y/o compensarlos.

La norma contribuye de forma positiva en la identificación, cuantificación, caracterización y zonificación de los impactos ambientales potenciales significativos generados por las actividades mineras y en la estructuración de sus medidas de manejo ambiental.


7. ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SUSTENTEN EL PROYECTO NORMATIVO

- Documento técnico de soporte.

ANEXOS:

Certificación de cumplimiento de requisitos de consulta, publicidad y de incorporación en la agenda regulatoria (Firmada por el servidor público competente –entidad originadora)	(Marque con una x)
Concepto(s) de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Cuando se trate de un proyecto de reglamento técnico o de procedimientos de evaluación de conformidad)	N/A
Informe de observaciones y respuestas (Análisis del informe con la evaluación de las observaciones de los ciudadanos y grupos de interés sobre el proyecto normativo)	(Marque con una x)
Concepto de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (Cuando los proyectos normativos tengan incidencia en la libre competencia de los mercados)	N/A
Concepto de aprobación nuevos trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública (Cuando el proyecto normativo adopte o modifique un trámite)	N/A
Otro (Cualquier otro aspecto que la entidad originadora de la norma considere relevante o de importancia)	N/A

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

Aprobó:

LAURA CAMILA RASMOS DÍAZ
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica


 YIOVANI PALECHOR MOPÁN
 Director de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana

Nombre y firma del (los) servidor(es) público(s) responsables de otras entidades (área(s) misional(es))

Elaboró: Sergio Rodrigo Hernández Cruz, Contratista DAASU. *SH*

Revisó: Laura Catalina Montenegro Díaz, Contratista DAASU *CM*

Karen Viviana López Aguilar, Coordinadora del Grupo del Sector de Hidrocarburos, Minería y Energético. *KVLA*



SH

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.